**JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Nº 3 DE
VALENCIA**

Procedimiento Abreviado 402/20

SENTENCIA Nº 153/2021

En Valencia, a 29 de abril de 2021

Visto por Laura Alabau Martí, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, los autos del Procedimiento Abreviado seguido a instancia de [REDACTED] Procurador en nombre y representación de [REDACTED] bajo dirección letrada de [REDACTED] [REDACTED] contra Diputación de Valencia representada y defendida por [REDACTED] [REDACTED] Letrado de sus SSJJ en impugnación de la resolución de 3 septiembre 2020 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio y diligencia de embargo procede dictar sentencia en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la citada entidad se formuló recurso y previo requerimiento de subsanación, demanda en la que, tras exponer los hechos y fundamentos legales que estimó oportunos en apoyo de su pretensión, terminó suplicando que se dictara sentencia estimatoria del recurso, en la que se declarase nulo el acto recurrido.

SEGUNDO: Admitida la demanda, previa reclamación del expediente administrativo, se citó a las partes a la vista.

Comparecidas las partes, la actora se ratificó en su demanda, oponiéndose la demandada en los términos que obran en autos.

Sin que se propusiera más prueba que la documental, fue declarado visto para sentencia.

TERCERO: En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La competencia de este Juzgado resulta de lo dispuesto en el art. 8.1 LRJCA.

En cuanto al procedimiento, se ha estado a lo dispuesto en el art. 78 y concordantes para el procedimiento abreviado a tenor de su cuantía.

SEGUNDO.-La parte actora interpone recurso contra la resolución que confirma en reposición la providencia de apremio dictada por el Servicio de Gestión Tributaria de

la Diputación de Valencia, para el cobro de liquidación por IBI correspondiente a ejercicio 2019, siendo objeto de reclamación el importe principal de 129,21 € más recargos, intereses y costas total 179,22 €.

Sostiene la parte, nulidad de la liquidación por inexistencia del hecho imponible, ya que el proyecto de reparcelación por el que se asigna la parcela objeto de gravamen al recurrente, ha sido anulado por STSJCV, que es firme.

Por el Ayuntamiento se opone en considerar el sistema de gestión compartida del IBI, corresponder al Catastro la cuestión suscitada, y haber sido desestimado el recurso de reposición interpuesto contra su resolución, sin que la parte haya formulado solicitud de suspensión cautelar.

TERCERO. El recurso contra la vía de apremio encuentra encaje en el art.167.3 d) LGT.

Efectivamente, como indica la parte actora, el proyecto de reparcelación que genera el inmueble gravado, ha sido anulado por STSJCV de 22 de noviembre de 2017, de la que fue ponente quien suscribe, y es firme.

La parte actora ha agotado las vías de reclamación económico administrativa, la Gerencia Regional del Catastro, resuelve como recurso de reposición el dirigido al Ayuntamiento contra la liquidación, por remisión del Ayuntamiento, cuando debía haber incoado un expediente de alteración catastral. En todo caso, la actora ha seguido la vía económico administrativa contra esta resolución.

La resolución incurre, dicho sea con efectos obiter dicta, en un error manifiesto, cuando afirma que la STSJCV anula la cuota cero, y no el proyecto de reparcelación, en cuanto atañe al recurrente.

Sobre la dualidad derivada del sistema de gestión compartida, ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente el TS, citando por todas, la última STS 493/20 de 19 de mayo, rec 5497/18: *TERCERO.- Contenido interpretativo de esta sentencia.*

1. En atención a lo razonado más arriba, estamos en condiciones de afirmar que en aquellos supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, carece de amparo jurídico permitir que se liquide un tributo (o que no se pueda anular el ya liquidado) por la sola circunstancia de que el órgano competente para fijar los valores catastrales no sea el ayuntamiento.

Como dijimos en la sentencia núm. 196/2019, de 19 de febrero (recurso de casación núm. 128/2016), ante un sistema impugnatorio complejo y potencialmente creador de disfunciones, cuando se producen situaciones como las descritas -u otras análogas- no cabe argüir, frente a una Administración que sirve con objetividad los intereses generales, que la misma permanezca inactiva -ante aquellos hechos constatados- dando lugar a un enriquecimiento injusto prohibido o a imponer a los administrados, ciudadanos de un Estado de Derecho, un verdadero peregrinaje por largos y costosos procedimientos para, a la postre, obtener lo que desde un inicio se sabía que le correspondía o, lo que es peor, esperando que el mero transcurso del tiempo convierta en inatacable situaciones a todas luces jurídicamente injustas.

Señalamos también, y conviene ahora reiterarlo, que tal forma de conducirse no se compadece con un sistema tributario basado en el principio superior de justicia y el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos conforme a la capacidad económica de cada uno ni, desde luego, se atempera mínimamente con el principio de buena administración que se prevé en el artículo 41 de la Carta de Niza y está implícito en nuestro sistema constitucional.

Lo expresamos literalmente así en nuestra reciente sentencia de 19 de febrero de 2019: "Ante estas situaciones excepcionales, para salvar las quiebras que hemos referido, el sistema general que distribuye las competencias entre gestión catastral y gestión tributaria debe reinterpretarse y pulir su rigidez para que en sede de gestión tributaria y en su

impugnación judicial quepa entrar a examinar la conformidad jurídica de dicho valor catastral, en su consideración de base imponible del gravamen, en relación con la situación jurídica novedosa que afecta al inmueble al que se refiere la valoración catastral y a esta misma, que no fue impugnada en su momento.

Ya en otras ocasiones hemos hecho referencia al principio de buena administración, principio implícito en la Constitución, arts. 9.3 y 103, proyectado en numerosos pronunciamientos jurisprudenciales y positivizado, actualmente, en nuestro Derecho común, art. 3.1.e) de la Ley 40/2015; principio que impone a la Administración una conducta lo suficientemente diligente como para evitar definitivamente las posibles disfunciones derivadas de su actuación, sin que baste la mera observancia estricta de procedimientos y trámites, sino que, más allá reclama, la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente al contribuyente y mandata a los responsables de gestionar el sistema impositivo, a la propia Administración Tributaria, observar el deber de cuidado y la debida diligencia para su efectividad y la de garantizar la protección jurídica que haga inviable el enriquecimiento injusto."

2. Por consiguiente, la cuestión que nos suscita el auto de admisión debe responderse en los siguientes términos: los artículos 65 y 77.1 TRLHL y 5 y el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004 TRLCI, deben ser interpretados en el sentido de que los mismos no se oponen ni obstan a que, recurriéndose liquidaciones por IBI y para obtener su anulación, en supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, análogas o similares a las descritas anteriormente (como la modificación por sentencia firme de la clasificación urbanística del suelo afectado), el sujeto pasivo pueda discutir la valoración catastral del inmueble, base imponible del impuesto, incluso en los casos en los que tal valoración catastral ha ganado firmeza en vía administrativa.

En nuestro caso efectivamente, el contribuyente ha agotado las vías posibles y no resulta razonable esperar a la resolución de la vía económico administrativa ante el TEAR, incluso ante el TSJCV a fin de confirmar que la anulación del proyecto de reparcelación en cuanto le atañe, y la imposibilidad de asignarle parcela de resultado, por sentencia firme, determinan la desaparición de dicha parcela, del Registro y del Catastro, pues como afirma la STS de 7 de noviembre de 2016 (recurso de casación 1045/2016): *las sentencias estimatorias con un contenido meramente anulatorio no precisan, en principio, de actuación ejecutiva alguna, salvo el supuesto de que se trate de una disposición de carácter general, en cuyo caso el fallo de la misma deberá ser publicado en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada -artículo 72.2 de la Ley de ésta Jurisdicción...*

Lo que indudablemente determina, la desaparición del hecho imponible, y dada la concurrencia de las circunstancias excepcionales referidas, al haber agotado la parte, ambas vías de la gestión compartida, existiendo un pronunciamiento judicial firme, procede revisar directamente la liquidación y la vía de apremio que trae causa de ella.

Por otra parte precisar, que si el proyecto de reparcelación permanece inscrito, será por inactividad, en la ejecución, del propio Ayuntamiento.

Se estima el recurso.

CUARTO. Conforme al art. 139 LRJCA se imponen las costas a la demandada.

VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación.

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo seguido a instancia de [REDACTED] en nombre y representación de [REDACTED] bajo dirección letrada de [REDACTED] [REDACTED] contra Diputación de Valencia representada y defendida por [REDACTED] [REDACTED] Letrado de sus SSJJ contra la resolución a que se refiere el encabezamiento, declarando que la misma no es conforme a Derecho.

Con imposición de costas a la parte demandada.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno. Se declara firme la sentencia.

Notifíquese a efectos del art. 104 TRLHL.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.